

## **PROGRAMA DE ACTUACIÓN**

### **1.- INTRODUCCIÓN.**

1.1 ANTECEDENTES: La Audiencia Provincial de Baleares cuenta con un presidente y cinco secciones. La presidencia de la Audiencia Provincial se halla vacante desde octubre de 2022 y actualmente está servida por el magistrado más antiguo. Esta situación excepcional ha provocado disfunciones, principalmente, en materia de unificación de criterios.

Las 5 secciones que integran la Audiencia Provincial aparecen distribuidas del modo siguiente: 1.-Dos secciones penales, las secciones Primera y Segunda, esta última con competencia exclusiva en violencia sobre la mujer, compuestas cada una de ellas por 6 magistrados. 2.-Tres secciones civiles, las Secciones Tercera (5 magistrados), Cuarta (4 magistrados), encargada de familia, incluidos los procedimientos que proceden del juzgado de violencia sobre la mujer, los procedimientos relativos a la protección de menores y a la capacidad de las personas) y Quinta (mercantil).

1.2 SECCIONES PENALES: La sección primera, penal, de la Audiencia Provincial ingresó en el año 2023 1609 asuntos, resolvió 1.591 asuntos, quedando en trámite al final del período 322 asuntos. En el mismo período, la sección segunda, penal, de la Audiencia Provincial, con competencia exclusiva en Violencia sobre la Mujer, en la que tomé posesión como presidenta de la sección con fecha 27 de marzo de 2024, ingresó 1.920 asuntos, resolvió 1.880 asuntos, quedando en trámite al final del período 463 asuntos. El módulo de entrada conjunto de ambas secciones penales en dicho período asciende a 3.529 asuntos.

En materia de recursos de apelación la Sección Segunda de la Audiencia Provincial realiza un reparto mensual de 20 asuntos a los que se debe sumar el reparto de asuntos urgentes adicionales (recursos contra autos que acuerdan medidas cautelares (presos, órdenes de protección), vigilancia penitenciaria, recursos de apelación frente a resoluciones dictadas por el Juzgado de lo penal encargado en exclusiva de la ejecución penal, medidas cautelares en materia de menores, entre otros.

La sección primera, realiza un reparto fijo de 17 asuntos a los que debe sumarse recursos contra autos que acuerdan medidas cautelares vigilancia penitenciaria, recursos de apelación frente a resoluciones dictadas por el Juzgado de lo penal encargado en exclusiva de la ejecución penal.

En el año 2024, la sección segunda, tuvo una entrada de 1116 recursos contra autos; 317 recursos contra sentencias; 116 recursos contra sentencias por delito leve; 28 recursos en materia de vigilancia penitenciaria; 24 recursos contra sentencias dictadas por el Juzgado de Menores y 8 recursos de queja. De ellos, se resolvieron 1062 recursos de apelación contra autos; 289 recursos contra sentencias; 168 recursos contra sentencias por delito leve; 28 recursos en materia de vigilancia penitenciaria; 19 recursos contra sentencias dictadas por el Juzgado de Menores y 7 recursos de queja, quedando 273 recursos de apelación contra autos pendientes de resolver; 129 recursos de apelación contra sentencias (entre delitos ordinarios y delitos cometidos por menores) y 35 recursos de apelación contra sentencias

dictadas por delito leve. El tiempo de respuesta en este ámbito, en ambas secciones, se sitúa en 3 o 4 meses.

En el año 2024, más concretamente, hasta el día 12 de diciembre de 2024, según los datos más recientes que me ha procurado la Oficina Judicial, ingresaron en la sección segunda un total de 131 Procedimientos Ordinarios frente a los 88 procedimientos ordinarios del ejercicio anterior (2023), y 169 Procedimientos abreviados frente a los 139 del ejercicio anterior (2023), lo que supone un incremento del 21,5%.

Este retraso en el enjuiciamiento en la sección que presido, según he sido informada, se debe a los siguientes factores: a) Una pendencia de enjuiciamiento inicial de 60 causas que no fueron debidamente diligenciadas al que se ha añadido el incremento de las causas ingresadas; b) La complejidad de las causas en atención a la materia o al número de partes o acusados lo que compromete de modo relevante la agenda de señalamientos en la medida en la que los juicios que pueden señalarse en una mañana son muy escasos, siendo habitual que precisen de dos o más sesiones para su diligenciamiento; c) al incremento exponencial de las causas por delitos contra la libertad sexual, con presuntas víctimas mujeres, menores o incapaces.

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, ya en el año 2023, dejaba constancia de que ambas secciones penales están sometidas a una fuerte carga de asuntos, habiendo aumentado el número de ingreso que incide en los mismos porque se trata de órganos muy tensionados.

Es previsible un empeoramiento de la situación para la sección que presido (sección segunda) a partir de la entrada en vigor de la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, por cuanto deberá asumir el enjuiciamiento exclusivo de los delitos que enumera el artículo 14 LECrim cuando entre víctima y acusado existan las relaciones detalladas en el precepto.

### 1.3 SECCIONES CIVILES:

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares correspondiente al año 2023 dejaba constancia de que la Sección Tercera, finalizaba el año 2023, con una pendencia de 946 asuntos. La sección cuarta con una pendencia de 994 asuntos y, la sección quinta, con una pendencia de 563 asuntos.

Las secciones tercera y quinta están integradas por cinco magistrados, mientras que la sección cuarta, está integrada por cuatro magistrados, siendo la cuarta plaza de reciente creación.

### 1.4 PARTIDOS JUDICIALES.

La provincia se divide en los siguientes partidos judiciales que están dotados de los siguientes órganos:

En la isla de Mallorca:

1.- Palma:

Juzgado Decano; 24 Juzgados de Primera Instancia; 12 juzgados de Instrucción, 6 Juzgados de lo Social; 4 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo; 4 Juzgados de lo Mercantil; 3 Juzgados de Violencia sobre la Mujer; 8 Juzgados de lo Penal; 1 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; 2 Juzgados de Menores; 2 juzgados con funciones exclusivas de Registro Civil. Sede de la Audiencia Provincial y del TSJ de les Illes Balears.

Se demanda la ampliación de plazas de jueces de primera instancia hasta un total de 11. En cuanto a los Juzgados de Familia sería necesario un Juez más para Incapacidades. Los juzgados de instrucción son suficientes, incluso podrían reconvertirse dos en violencia.

Los Juzgados de Violencia se prevé que incrementen exponencialmente su trabajo con la atribución de la competencia para instruir los delitos de agresión sexual en los términos previstos en el art. 14 redactado conforme a lo dispuesto en la LO 1/25, de 2 de enero.

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo presentan un retraso muy relevante. Ha entrado en funcionamiento el cuarto juzgado y hay un refuerzo doble de dos jueces por órgano. Los Juzgados de lo Penal son suficientes y dos de ellos, incluso, se podrían especializar en violencia sobre la mujer.

En el Juzgado de lo Penal nº 8 se advierte un exceso de 10 funcionarios que permitirían reconvertir el órgano en un nuevo Juzgado penal haciendo que cada juzgado de lo penal lleve sus ejecutorias.

Los juzgados de lo social cuentan con un 7º juez de refuerzo, un JAT. Actualmente son 6 y ha mejorado el servicio por descenso número de asuntos y por la creación del sexto Juzgado.

2.- Inca: Cinco juzgados de Instancia y 3 juzgados de instrucción.

3.- Manacor: Cinco juzgados de Instancia y 3 juzgados de instrucción.

4.- Calviá: 2 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (categoría Juez).

Este partido judicial ha sido creado por la LO 1/25, de 2 de enero.

5.-Menorca: En Ciutadella de Menorca cuentan con dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y un Juzgado de lo Social. En Mahón cuentan con tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción y un juzgado de lo penal.

Es el partido de menor carga de trabajo, aunque se advierte un incremento de tal carga.

6.-Eivissa (Ibiza): 6 juzgados de primera instancia; 4 juzgados de instrucción; 1 juzgado de lo social; 1 juzgado de violencia; 2 juzgados de lo penal.

Todo ello sin perjuicio de la reestructuración de dichos órganos que supondrá la entrada en vigor LO 1/25, 2 enero.

#### 1.5 OTRAS DISFUNCIONES:

Se han detectado deficiencias respecto de la elaboración de los atestados en materia de inmigración ilegal que no han sido resueltas con la actual configuración de la Comisión de Policía Judicial. También, respecto del actual

tratamiento de los delitos en los que las víctimas son menores de edad, particularmente, por lo que respecta al hecho de que se vean obligadas a reiterar la declaración sobre los hechos en las distintas fases del proceso penal, con la revictimización que ello supone. También en los que las víctimas o los acusados son personas con discapacidad intelectual, debido a las dificultades que para ellos puede suponer la comprensión del proceso y sus consecuencias, así como para los tribunales, la adecuada interpretación de la información que dichas víctimas pretenden trasladar a los órganos encargados del enjuiciamiento de los asuntos.

#### 1.6 OFICINA JUDICIAL:

La interinidad del funcionariado es un problema endémico en Mallorca y, en general, en Baleares, motivado por el escaso porcentaje de funcionarios con residencia habitual en la Isla que aprueban las oposiciones. Ello supone que las plazas sean asignadas a funcionarios procedentes de la península o Canarias que, con prontitud piden traslado. Todo ello favorecido por la insularidad y el alto coste de la vivienda y de la vida en general.

#### 1.7 PROPUESTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES PENALES:

El incremento de la carga de trabajo y la demora en el enjuiciamiento de los asuntos que afecta de modo análogo a ambas secciones penales exige a mi juicio de la creación de una nueva sección penal. El funcionamiento desdoblado de ambas secciones, en dos tribunales de tres magistrados,

resulta a todas luces insuficiente para afrontar la demora actual que, en el caso de la sección que presido, se objetiva en el hecho de que se está efectuando el señalamiento de asuntos más allá del mes de mayo de 2028.

Otras Audiencias Provinciales con la misma población cuentan con más de dos secciones penales (Cádiz, Murcia, Málaga, Las Palmas, Vizcaya y A Coruña).

Subsidiariamente, deberían acordarse con urgencia medidas de refuerzo (comisiones de servicio, jueces de adscripción territorial, magistrados suplentes) para conformar una sala de tres magistrados, con apoyo de un funcionario de auxilio y un funcionario de tramitación, que permitiera a estos tres magistrados dedicarse en exclusiva a la celebración de juicios orales con la finalidad de paliar el inasumible retraso en el enjuiciamiento de asuntos que padecen ambas secciones. Esta última medida ha sido aprobada en otras audiencias que cuentan con esta misma disfunción como ocurre con la Audiencia Provincial de Tarragona.

#### 1.8 PROPUESTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS SECCIONES CIVILES.

Con la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta en la resolución de asuntos, atendida la distribución de los mismos por materias entre las tres secciones penales, se advierte la necesidad de creación de una nueva sección civil, como han recogido precedentes informes de la presidencia de la Audiencia. También es preciso dotar a la sección cuarta de un quinto magistrado con la finalidad de equipararla a las restantes secciones civiles que cuentan con una plantilla de 5 magistrados cada una de ellas. Esta equiparación resulta precisa si se toma en consideración que dicha sección es



la encargada de conocer de los procedimientos de familia, incluidos los procedimientos que proceden del juzgado de violencia sobre la mujer, de los procedimientos relativos a la protección de menores y a la capacidad de las personas.

#### 1.9 PROPUESTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS DISFUNCIONES DETALLADAS EN EL PUNTO 1.4.

Para la resolución de las deficiencias advertidas en los atestados, relacionadas con los delitos relativos a la inmigración ilegal, que han experimentado un importante incremento como consecuencia de la llegada incesante de pateras a las costas del archipiélago balear, propongo la integración o, cuando menos, la colaboración de la Policía de Vigilancia Aduanera en dicha Comisión, por cuanto permitiría unificar criterios respecto de los elementos esenciales que deben hacerse constar en los atestados para la aplicación de la agravación prevista en el art. 318 bis 3 b) relacionada con la puesta en peligro de la vida de las personas objeto de la infracción.

En la actualidad dicha Comisión se halla integrada por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y cuenta con la participación de la Policía Local.

En cuanto a las disfunciones relacionadas con la reiteración de declaraciones que deben prestar las víctimas, en particular las víctimas menores e incapaces, propongo la creación de un modelo amigable de respuesta multidisciplinar o interinstitucional para la coordinación de las investigaciones penales y las evaluaciones de los servicios sociales en casos de violencia contra la infancia, incluido el abuso sexual infantil. Se trata de un modelo de atención integral donde todos los departamentos se coordinen y trabajen en

un mismo espacio, en un entorno amigable, adaptado a la edad de las víctimas. En dicho espacio se hallarían integrados todos los servicios (judicial y de asistencia) para que el menor declara una sola vez-declaración que sería grabada-, con la participación del Juez, Fiscal, psicólogos y las partes, que permitiera recoger el testimonio de la víctima, evitar que tenga que acudir a juicio oral y facilitar su recuperación.

También debieran revisarse los protocolos relativos al diligenciamiento de las pruebas preconstituidas ya que en muchos casos o no se practican o se practican de modo incorrecto lo que obliga a que las víctimas deban reproducir nuevamente los hechos en el acto de juicio oral con la consiguiente revictimización, evitable en la mayoría de los supuestos, con el retroceso en el tratamiento que ello supone.

Con la finalidad de procurar a las víctimas o acusados afectos por alguna discapacidad intelectual de medidas de apoyo cuando deban intervenir en procesos judiciales, propongo integrar la figura del Facilitador para que les asistan y les ayuden a comprender la trascendencia de las actuaciones judiciales y sus consecuencias, así como para que auxilien a los órganos judiciales y le ayuden a interpretar adecuadamente la información que les aporten en el curso de las declaraciones que efectúen ante los mismos.

## 2.- OTRAS PROPUESTAS.

Es necesario dotar a la Audiencia Provincial de un nuevo edificio con salas adecuadas para celebrar juicios, particularmente, en el orden penal en el que con mucha frecuencia los asuntos, por su complejidad y por el elevado número de acusados, tensan el estado de las instalaciones y medios actualmente existentes.

Con la finalidad de estabilizar las plantillas de funcionarios sería preciso equiparar los complementos de insularidad a los vigentes para la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.- CONCLUSIONES: Esta es la situación actual y las propuestas que en el momento presente estimo precisas para solventar las deficiencias estructurales advertidas, sin perjuicio de que su evolución o la reestructuración de órganos que se llevará a efecto con ocasión de la entrada en vigor de la LO 1/25, 2 enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público, aconseje reconsiderar tales propuestas.